



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-012-2016-01494-01 (O2-22-305)
Accionante: MARÍA GLADYS OSORIO MONTOYA
Accionada: ODONTOVIDA S.A.S. y COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAR Y ASISTENCIA
Procedencia: JUZGADO VEINTICUATRO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: NULIDAD INDEBIDA NOTIFICACIÓN – DEBIDO PROCESO

En Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-012-2016-01494-01 (O2-22-305), instaurado por MARÍA GLADYS OSORIO MONTOYA en contra de la sociedad ODONTOVIDA S.A.S. y la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAR Y ASISTENCIA a la par de ejercer, en los términos del artículo 132 del CGP, control de legalidad sobre la actuación, a efectos de corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso.

1. ANTECEDENTES

La señora MARIA GLADYS OSORIO MONTOYA quien actúa a través de apoderada judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de sociedad ODONTOVIDA S.A.S. y la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAR Y ASISTENCIA, en lo sucesivo, CTA INTEGRAR, con miras a obtener el reconocimiento y pago solidario de la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales y las costas.

En respaldo de sus aspiraciones señala que prestó sus servicios por cuenta de la entidad cooperativa, y, a favor de la sociedad ODONTOVIDA S.A.S., a partir del 22 de junio de 2005 y hasta el 1° de enero de 2012, desempeñando el cargo de auxiliar de odontología y percibiendo como remuneración mensual una suma igual a \$729.300. Explica que puso a disposición su fuerza de trabajo a favor de la codemandada ODONTOVIDA S.A.S., en virtud de la suscripción

de un contrato de oferta mercantil con el organismo cooperativo, el que tenía por objeto prestar servicios médicos asistenciales.

Relata que el 1° de enero de 2012, *[l]os empleadores solidarios dieron por terminado Unilateralmente(sic) el contrato de trabajo; lo cual hace que la aquí Demandante(sic) tenga Derecho(sic) a LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO O TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO, o sea (30) Treinta(sic) días por el primer año, y por los otros (5) cinco años y medio. Cincuenta(sic) (50) días por cada uno, o sea que en total sería(sic) 305 días de salario que le adeuda el empleador solidario a la Demandante(sic);* aclarando que el 23 de octubre de 2015 elevó la respectiva reclamación, la que no fuera atendida por las accionadas; razones por las que considera le asiste razón a sus pedimentos.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 07 de febrero de 2017 (doc.05, carp.01), ordenando notificar y correr traslado a las convidadas a juicio. Ante la imposibilidad de notificar personalmente a las accionadas (doc.08, carp.01), se les designó curador *ad litem*, quien dio contestación al escrito inaugural y discutió la prosperidad de los pedimentos (docs.15 y 17, carp.01). En sustento de la oposición, presentó los medios exceptivos que individuó como inexistencia del derecho, inexistencia de la relación laboral, compensaciones, prescripción, falta de causa para demandar y pago.

Asimismo, en providencia del 06 de diciembre de 2017 (doc.09, carp.01), el *a quo* dispuso emplazar a los señores *Santiago Barón Soto y Martha Aleyda Ávila, en calidad de representantes legales, o de quienes hagan sus veces, de las sociedades ODONTOVIDA S. A. S. y COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAR Y ASISTENCIA EN LIQUIDACIÓN*; publicación que se efectuó en medio escrito el 25 de febrero de 2018 (doc.11, carp.01), como también con la inscripción el 07 de marzo de 2018, en el Registro Nacional de Personas Emplazadas – RNPE (doc.12, carp.01), base de datos donde se dejó la observación de ser un proceso privado.

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 17 de agosto de 2022 (docs.23 y 24, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, en la que absolvió a las demandadas ODONTOVIDA S.A.S. y CTA INTEGRAR de todas las pretensiones incoadas en su contra, gravando en costas a la demandante.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado luego de explicar la naturaleza de los vínculos cooperativos y los postulados constitucionales que nutren la figura del contrato realidad, concluyó que la trabajadora demandante no cumplió la carga de la prueba que le incumbía tendiente a demostrar la prestación personal del servicio a favor del pretenso empleador, resultando improcedente activar a su favor la presunción de que trata el artículo 24 del CST.

En este horizonte y para resolver la litis, la falladora no le otorgó capacidad demostrativa a la certificación laboral expedida por la sociedad ODONTOVIDA S.A.S. ante la falta de medios de prueba testimonial que respaldaran la prestación personal del servicio, más aun cuando en el mencionado certificado de trabajo se consignó que la actora estuvo vinculada a esta última sociedad por virtud de un convenio de asociación indefinido, y siendo ello así, no se probó que la realidad fuera distinta a las formalidades (minuto 40:16 a 53:42, doc.23, carp.01)

1.3. Recurso de Apelación

La procuradora judicial de la señora MARÍA GLADYS OSORIO MONTOYA inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, a fin de que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se acceda a la totalidad de los pedimentos. Con tal propósito, menciona la Ley 273 de 2008 y las sentencias números 873 del año 2005, 445 del año 2006, 063 del año 2006, 531 del año 2007 y 504 del año 2008, dictadas por la Corte Suprema de Justicia, para así sostener que la sociedad ODONTOVIDA S.A.S. durante la vigencia del vínculo contractual ejerció actos de continua subordinación, como lo eran, la fijación de horarios y el pago de la remuneración, dando cuenta de lo anterior la prueba documental que fue aportada con el escrito demandatorio (minuto 54:40 a 1:00:03, doc.23, carp.01).

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 29 de agosto de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 05 de septiembre del mismo año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso. Precluido el término concedido, las partes integrantes de la litis guardaron silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, procede la Sala a ejercer control de legalidad de esta actuación judicial, con arreglo al mandato establecido en el artículo 132 del CGP, para así adoptar la decisión que garantice el equilibrio y las garantías fundamentales de las partes en contienda, lo que de contera y por sustracción de materia, impide resolver de fondo, por los dislates que apuntaló la censura.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si se afectan las garantías constitucionales al debido proceso y al derecho a la defensa, estipulados entre otros, en el artículo 8 de la CADH, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos 29 y 229 de la CP; por cuenta de no ser accesible el proceso judicial en el Registro Nacional de Personas Emplazadas – RNPE, y no demostrarse los actos de enteramiento que incumben a las personas jurídicas demandadas.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala declarará la nulidad de la sentencia proferida el 17 de agosto de 2022 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 8¹ del artículo 133 del CGP, en consonancia con lo enseñado por el artículo 29² del CPTSS, y en consecuencia, se dispondrá rehacer la actuación viciada de nulidad, de modo que, el emplazamiento de la sociedad ODONTOVIDA S.A.S. y la CTA INTEGRAR se surta con pleno cumplimiento de los requisitos legales, en función de materializar la eficacia del acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y del derecho al debido proceso.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

2.3.1 El Debido Proceso

El artículo 29 de la CP consagra el debido proceso como una garantía fundamental de la cual gozan todos los ciudadanos que intervienen en las actuaciones judiciales y administrativas, del cual hacen parte:

¹ **Artículo 133. Causales de nulidad.** El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
(...)

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado

² **Artículo 29. Nombramiento del curador ad litem y emplazamiento del demandado.** Cuando el demandante manifieste bajo juramento, que se considera prestado con la presentación de la demanda, que ignora el domicilio del demandado, el juez procederá a nombrarle un curador para la litis con quien se continuará el proceso y ordenará su emplazamiento por edicto, con la advertencia de habersele designado el curador. El emplazamiento se efectuará en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 318 del Código del Procedimiento Civil y no se dictará sentencia mientras no se haya cumplido. Cuando el demandado no es hallado o se impide la notificación, también se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores, previo cumplimiento de lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. En el aviso se informará al demandado que debe concurrir al juzgado dentro de los diez (10) días siguientes al de su fijación para notificarle el auto admisorio de la demanda y que si no comparece se le designará un curador para la litis.

- a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;
- b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
- c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;
- d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;
- e) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Como se puede vislumbrar, una de las principales garantías del debido proceso, es el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial, de ser oída, hacer valer sus razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar las pruebas allegadas en su contra, y solicitar la práctica y valoración de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten.

No cabe duda de que el principio de publicidad es uno de los presupuestos esenciales del derecho a la defensa, pues su finalidad es dar a conocer la actuación adelantada a los particulares directamente afectados. Cabe subrayar que la indebida notificación, de acuerdo con la jurisprudencia, se sustenta en una injusticia que implica adelantar un proceso a espaldas de quien ha debido brindársele la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, o cuando

menos de ser oído, notificándolo o emplazándolo debidamente, o asegurando su correcta representación.

2.3.2 El Instituto de las Nulidades Procesales

Las nulidades se originan en irregularidades que se presentan en desarrollo de un proceso, capaces de subvertir el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador, y excepcionalmente el constituyente, les ha atribuido la consecuencia-sanción de invalidar las actuaciones surtidas, y a través de su declaración se controla la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso (T-125 de 2010).

Nuestro sistema procesal ha adoptado un sistema de enunciación taxativa de las causales de nulidad, lo que significa que solo se pueden considerar vicios que afectan la actuación procesal, aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente por la Constitución; cualquier otra irregularidad deberá ser alegada mediante los recursos previstos por la normativa procesal, y no podrá servir de fundamento de una declaración de nulidad.

En línea con lo anterior, cristalino se muestra que el instituto de las nulidades procesales consagrado en el ordenamiento procedimental es expresión y desarrollo del derecho al debido proceso antes explicado, y en razón a ello es obligación de talante constitucional, prodigada al juzgador, otorgar a las partes integrantes de una litis todas las garantías para que el escenario donde se desarrolla la misma sea de acuerdo a reglas predeterminadas e inviolables. Por ello el legislador otorgó a las partes, a través del artículo 133 del CGP la posibilidad de que puedan alegar el vicio adjetivo en que se incurrió en el proceso, con miras a obtener la reparación del perjuicio que con ese yerro se les haya ocasionado, así también, el deber del funcionario judicial de adoptar de oficio las medidas de saneamiento conducentes³.

2.3.3 Notificación por Emplazamiento

Según las elocuentes voces del artículo 29 del CPTSS *[c]uando el demandante manifieste bajo juramento, que se considera prestado con la presentación de la demanda, que ignora el domicilio del demandado, el juez procederá a nombrarle un curador para la litis con quien se continuará el proceso y ordenará su emplazamiento por edicto, con la advertencia de habersele designado el curador. **El emplazamiento se efectuará en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 318 del Código del Procedimiento Civil⁴ y no se dictará sentencia***

³ CGP, artículo 133. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.

⁴ Debe tenerse en cuenta que la referencia al CPC que allí reposa debe comprenderse teniendo en cuenta que la disposición fue redactada antes de la vigencia de las Leyes 794 de 2003 y 1564 de 2012, de ahí que la interpretación de este imperativo esté llamada a armonizarse con los artículos 108, 292 y 293 del CGP y artículos 40, 48 y 145 del CPTSS.

mientras no se haya cumplido. Cuando el demandado no es hallado o se impide la notificación, también se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores, previo cumplimiento de lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. En el aviso se informará al demandado que debe concurrir al juzgado dentro de los diez (10) días siguientes al de su fijación para notificarle el auto admisorio de la demanda y que si no comparece se le designará un curador para la litis.

La interpretación plausible de este precepto, comporta la necesidad insoslayable de practicar el emplazamiento de todas aquellas personas naturales o jurídicas que, estando llamadas a integrar el contradictorio, no fue posible notificarlas de manera personal. Lo precedente, con el interés de darles aviso de la existencia del proceso y ampliar la posibilidad de enteramiento, en aras que puedan ejercitar su derecho de defensa dentro de las reglas propias del juicio. En orden a lo anterior, es de precisar que de cara al ejercicio conclusivo vertido en la sentencia C-420 de 2020 dictada por la Corte Constitucional, *el emplazamiento está encaminado a “que públicamente se llame a aquel contra quien se adelanta un proceso, a que concurra”*.

(...)

Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que cada una de las fases del emplazamiento tiene un valor indispensable para el proceso. Por lo que, en conjunto, el emplazamiento tiene por objeto incrementar la posibilidad de que, de manera efectiva, los interesados tengan noticia del proceso y puedan ejercer sus derechos de defensa y contradicción. Esta finalidad, a criterio de la Sala, fue diseñada de manera cuidadosa y específica por el Legislador, quien puntualizó en cada caso las exigencias encaminadas a ofrecer un margen alto de probabilidad para que el citado conozca de la litis. Por lo que, según afirma la Sala Civil, “su estricta observancia, [...resulta], tan importante como ineludible”.

Así las cosas, la jurisprudencia ha entendido que la notificación por emplazamiento: (i) es de carácter excepcional; (ii) busca obtener un equilibrio entre la necesidad de asegurar que el proceso se adelante sin dilaciones injustificadas, en beneficio de los intereses del demandante, sin que se desatiendan los derechos del demandando; (iii) hace efectiva la asistencia del demandado al proceso; y (iv) es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de defensa y contradicción del demandado o tercero interesado en el proceso. Por lo que, su inobservancia da lugar a la posibilidad de solicitar la nulidad de lo actuado, en un determinado proceso.

Bajo este derrotero, se predica la eficacia del edicto emplazatorio cuando se verifica que contiene al menos la siguiente información: i. La inclusión del nombre del sujeto emplazado y

su número identificación, en caso de que se conozca; **ii.** El nombre o razón social de las partes del proceso; **iii.** La naturaleza del litigio, y; **iv.** El juzgado que lo requiere; a la par que, actualmente debe ser publicado e inscrito en el RNPE, definido como una *base de datos sobre los procesos adelantados ante los jueces en los que se requiere la comparecencia de la persona emplazada*⁵. Cumple precisar, que el emplazamiento solo se entenderá surtido 15 días después de publicada la información en el registro⁶, y, en tratándose de las controversias que se surtan ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social, es de advertir que, el juzgador no podrá proferir sentencia de instancia mientras no se haya agotado este trámite⁷.

2.3.4 Del Caso Concreto

Revisados los actos procesales de notificación en el acontecer judicial, la Sala encuentra que, el emplazamiento de las convidadas a juicio, sociedad ODONTOVIDA S.A.S. y CTA INTEGRAR, no se sujetó a los postulados y presupuestos arriba explicados con suficiencia. Bajo esa tesitura, se evidenció que a pesar de que el juzgado de instancia registró el proceso en la base de datos de las personas emplazadas, las actuaciones y demás información relativa a la existencia de la acción judicial no pudo ser consultada. Esto ocurre, en tanto en cuanto, el despacho judicial clasificó la actuación judicial en el RNPE como privada⁸, y siendo ello así, a las claras se muestra que el proceso es inaccesible para los ciudadanos interesados, trastocando con ello el principio basilar de publicidad que informa el derecho al debido proceso, y, de contera, se restringió de forma injustificada el ejercicio del derecho a la defensa de las enjuiciadas.

Adicionalmente, se observa en la copia incorporada al proceso⁹, que no se siguió el procedimiento establecido en el “manual para uso del sistema de gestión de procesos judiciales web de justicia en línea¹⁰”, por razón que solo fueron emplazados las personas naturales que para la época de expedición de los certificados de existencia y representación legal, fungían como representantes de las convidadas a juicio; lo que permite inferir que las personas jurídicas demandadas fueron omitidas como emplazadas, cuando era obligatorio hacerlo. El defecto antes referenciado, se reprodujo también en la publicación efectuada en el diario de amplia circulación El Mundo (doc.11, carp.01), empero, el proceso continuó dictándose sentencia, con lo que se consumó el quebrantamiento al derecho al debido proceso y a la defensa que le asiste a las demandadas.

⁵ Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PSAA14-10118 de 2014

⁶ CGP, artículo 108.

⁷ CPTSS, artículo 29.

⁸ Ver anexo 01.

⁹ Ibid.

¹⁰ Consultable en el sitio web Justicia Siglo XXI

Colofón de lo expuesto y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes descritas, se dispondrá por la Sala, la declaratoria oficiosa de la nulidad de la sentencia proferida el 17 de agosto de 2022 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, por cuenta de la infracción directa al artículo 29 de la CP, y en consecuencia, el funcionario judicial de instancia deberá rehacer la actuación viciada observando lo establecido en los artículos 29 del CPTSS, 108 del CGP y 10 de la Ley 2213 de 2022, esto es, incluyendo el emplazamiento de las aquí accionadas, ODONTOVIDA S.A.S. y CTA INTEGRAR en el RNPE, haciendo público el proceso judicial para ser consultado por todos los interesados.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP y en atención al contenido y alcance de la decisión adoptada de manera oficiosa por la Sala, no hay lugar a imponer condena en costas.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral,**

4. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la sentencia proferida el 17 de agosto de 2022 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, ORDENAR a la autoridad judicial, rehacer la actuación procesal según y conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.


Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, según lo previsto en el artículo 41 literal c) del CPTSS.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



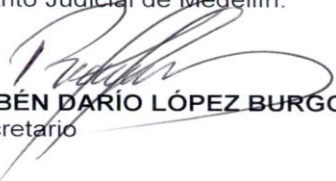
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



ANEXO CAPTURA PANTALLA RNPE

Maria Ines
Sierra
Cuartas



RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO
RED INTEGRADA PARA LA
GESTIÓN DE PROCESOS
JUDICIALES EN LÍNEA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



Save ► Configuración ► Administración ►

CÓDIGO DEL PROCESO 05001310501220160149400

Es ☐

Comisorio/Descongestión

Instancia PRIMERA INSTANCIA/UNICA INSTANCIA/ Año 2016

Departamento ANTIOQUIA Ciudad MEDELLIN

Corporación JUZGADO DE CIRCUITO 31 Especialidad JUZGADO DE CIRCUITO - LABORAL

Despacho Juzgado De Circuito - Laboral 012 Medellin Distrito\Circuito MEDELLIN

Juez/Magistrado MARCELA MARIA GONZALEZ FLECHAS

Número Consecutivo 01494 Número Interpuestos 00

Tipo Proceso DECLARATIVO - LABORAL Clase Proceso ORDINARIO

SubClase Proceso EN GENERAL / SIN SUBCLASE Fecha 06/12/2016 12:00:00 A. M.

Es Privado ☒ Esta ☐

Bloqueado

Cuántia Del Proceso 0 Monto 0

Compensación

Valor Pretensiones 0 Valor Condena 0

En Pesos

Observación

INFORMACIÓN DEL SUJETO

Debe activarse la casilla de verificación de la columna "Emplazado" de cada sujeto procesal para hacerse efectiva la inscripción en el RNPE.

Buscar Sujeto		Tipo Sujeto	Emplazado	Es Privado	Tipo De Identificación	Número Identificación	Nombre(S) Y Apellido(S) / Razón Social	Apoderado
		Demandante/Accionante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CÉDULA DE CIUDADANIA	42969905	MARIA GLADYS DEL SOCORR OSORIO MONTOYA	BERTHA LIBIA
		Defensor Privado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CÉDULA DE CIUDADANIA	21393895	BERTHA LIBIA VIDALES VILLA	
		Demandado/Indiciado/Causante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NIT	811026720	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAR Y ASISTENCIA EN LIQUIDACION	---SELECCIONAR---
		Demandado/Indiciado/Causante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CÉDULA DE CIUDADANIA	15436695	SANTIAGO BARON SOTO	---SELECCIONAR---
		Demandado/Indiciado/Causante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NIT	811034488	ODONTOVIDA S.A.S	---SELECCIONAR---

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Buscar Predio

HECHOS ASOCIADOS

Agregar

ARCHIVO(S) ADJUNTO(S)

Adjuntar/Descargar Archivos

Tipo Archivo ---SELECCIONE---

Buscar No se eligió archivo



		Nombre Del Archivo	Tipo Archivo	Certificado De Integridad	Tamaño (KB)
		05001310501220160149400_EMPLAZAMIENTO_1 2-03-2018 2.36.42 P. M..Pdf	EMPLAZAMIENTO		397342

* Campos Obligatorios



Rama Judicial
Consejo Superior De La Judicatura
Direccion Ejecutiva De Administración Judicial
Unidad De Informática

Calle 72 No. 7 - 95 Bogotá
Colombia

PBX. (571) 3127011 - E-Mail:
Soporte_rj_tyba@Deaj Ramajudicial Gov.Co



Último Acceso 07/Mar./2018
03:14:21 P. M.,

1.0.1.0

Maria Ines
Sierra
Cuartas



RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO
RED INTEGRADA PARA LA
GESTIÓN DE PROCESOS
JUDICIALES EN LÍNEA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



Save ► Configuración ► Administración ►

CÓDIGO DEL PROCESO05001310501220160149400

Es

Comisorio/Descongestión

InstanciaPRIMERA INSTANCIA/UNICA INSTANCIA/

Año2016

DepartamentoANTIOQUIA

CiudadMEDELLIN

CorporaciónJUZGADO DE CIRCUITO 31

EspecialidadJUZGADO DE CIRCUITO - LABORAL

DespachoJuzgado De Circuito - Laboral 012 Medellin

Distrito/CircuitoMEDELLIN

Juez/MagistradoMARCELA MARIA GONZALEZ FLECHAS

Número Consecutivo01494

Número Interpuestos00

Tipo ProcesoDECLARATIVO - LABORAL

Clase ProcesoORDINARIO

SubClase ProcesoEN GENERAL / SIN SUBCLASE

Fecha06/12/2016 12:00:00 A. M.

Es Privado

Está Bloqueado

Cuántia Del Proceso0

Monto0

Valor Pretensiones0

Valor Condena0

En Pesos

Observación

INFORMACIÓN DEL SUJETO

Debe activarse la casilla de verificación de la columna "Emplazado" de cada sujeto procesal para hacerse efectiva la inscripción en el RNPE.

Buscar Sujeto

	Tipo Sujeto	Emplazado	Es Privado	Tipo De Identificación	Número Identificación	Nombre(S) Y Apellido(S) / Razón Social	Apoderado			
			Demandado/Indiciado/Causante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CÉDULA DE CIUDADANIA	20617323	MARTHA ALEYDA AVILA	---SELECCIONAR---	

12

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Buscar Predio

HECHOS ASOCIADOS

Agregar

ARCHIVO(S) ADJUNTO(S)

Adjuntar/Descargar Archivos





Tipo Archivo---SELECCIONE---

Buscar Archivo

Seleccionar archivo

No se eligió archivo

Nombre Del Archivo	Tipo Archivo	Certificado De Integridad	Tamaño (KB)
--------------------	--------------	---------------------------	-------------

 	05001310501220160149400_EMPLAZAMIENTO_1 EMPLAZAMIENTO	397342
2-03-2018 2.36.42 P. M..Pdf		
* Campos Obligatorios		 

Rama Judicial
Consejo Superior De La Judicatura
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
Unidad De Informática

Calle 72 No. 7 - 96 Bogotá
Colombia

PBX: (571) 3127011 - E-Mail:
Soporte_ri_lyba@Deaj.Ramajudicial.Gov.Co



Último Acceso 07/Mar./2018
03:14:21 P. M..

1.0.1.0